



**Convención Internacional
sobre la Protección de los
Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares**

Distr. general
24 de septiembre de 2015
Español
Original: inglés
Español, francés e inglés únicamente

**Comité de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares**

**Examen de los informes presentados por los Estados
partes en virtud del artículo 73 de la Convención
con arreglo al procedimiento simplificado de
presentación de informes**

**Informe inicial que los Estados partes debían
presentar en 2005**

Timor-Leste*

[Fecha de recepción: 1 de septiembre de 2015]

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.



Lista de siglas

ASEAN	Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
DNAK	Dirección Nacional de Asuntos Consulares
DNKEPD	Dirección Nacional de Búsqueda de Empleo y Protección del Desempleado
DNKT	Dirección Nacional de Condiciones Laborales
DNRT	Dirección Nacional de Relaciones Laborales
IJT	Inspección General de Trabajo
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
MCIMA	Ministerio de Comercio, Industria y Medio Ambiente
MREC	Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación
MI	Ministerio del Interior
MJ	Ministerio de Justicia
MOU	memorando de entendimiento
SM	Servicio de Migración
MSS	Ministerio de Solidaridad Social
PDHJ	Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia
PNTL	Policía Nacional de Timor-Leste
SEJD	Secretaría de Estado para la Juventud y los Deportes
SEPSEM	Secretaría de Estado para el Apoyo y la Promoción Socioeconómica de la Mujer
SEPFOPE	Secretaría de Estado para la Política de Empleo y Formación Profesional

Introducción

1. El Estado de Timor-Leste elaboró su informe inicial acerca de la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares sobre la base de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe inicial, que fue aprobada por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en su 20º período de sesiones, celebrado en marzo y abril de 2014.

2. El presente informe fue preparado por la Secretaría de Estado para la Política de Empleo y Formación Profesional (SEPFOPE), el Ministerio de Justicia (MJ), el Servicio de Migración (SM), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación (MREC) y la Secretaría de Estado para el Apoyo y la Promoción Socioeconómica de la Mujer (SEPSEM), con el apoyo de varias otras entidades del Estado. El Gobierno también llevó a cabo una consulta pública con la sociedad civil, el sector privado y los representantes de las embajadas acreditadas en Timor-Leste. La Dependencia del Asesor de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) prestaron asistencia técnica durante la elaboración del informe.

A. Información de carácter general

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 1 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe (CMW/C/TLS/QPR/1)

3. En la Constitución de la República Democrática de Timor-Leste se establece que los convenios, tratados y acuerdos internacionales incorporados al ordenamiento jurídico interno del país, en virtud de su aprobación, ratificación o adhesión y su publicación en el *Boletín Oficial*¹, tienen precedencia sobre cualquier norma jurídica contraria y conllevan su derogación². No obstante, esos instrumentos han de adaptarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, junto con los principios constitucionales que garantizan la primacía de la Constitución en el marco jurídico de Timor-Leste³.

4. Con todo, el sistema internacional de derechos humanos sigue ocupando un lugar privilegiado en el ordenamiento jurídico de Timor-Leste y para la interpretación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución se siguen las normas y directrices que ofrece la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948⁴.

5. Además, en la Constitución se establece que las normas enunciadas en los convenios, tratados y acuerdos internacionales habrán de aceptarse de manera automática y tendrán precedencia, por lo que todas las leyes vigentes en Timor-Leste tendrán que ser compatibles con esas normas internacionales. Al adoptarse esa medida, en la Constitución se ha concedido a la Corte Suprema de Justicia o al

¹ Constitución de la República Democrática de Timor-Leste, artículo 9.

² En esa doctrina se establece la aceptación automática de las normas, con el fin de que no sea necesario que los convenios, tratados y acuerdos internacionales se incorporen en una determinada ley para que adquieran validez en el ordenamiento jurídico interno. Así pues, lo importante es que esos instrumentos internacionales deben presentarse en una forma legalmente establecida para ser aceptados en el ordenamiento jurídico interno y, cuando se encuentran en la forma correcta, se consideran automáticamente válidos en el ordenamiento jurídico de Timor-Leste.

³ Constitución de la República Democrática de Timor-Leste, artículo 2.

⁴ Constitución de la República Democrática de Timor-Leste, artículo 23.

Tribunal de Apelación⁵ la facultad de llevar a cabo un examen previo de la constitucionalidad de toda ley que vaya a ser promulgada por el Presidente de la República⁶.

6. En la Constitución también se refuerzan diversos derechos fundamentales de los que disfrutaban tanto los ciudadanos timorenses como los extranjeros y los apátridas; en el artículo 16, por ejemplo, se consagran los principios de universalidad e igualdad. Más concretamente, el marco jurídico nacional incluye disposiciones relativas a la protección de los derechos de los trabajadores migratorios, en particular la Ley de Inmigración y Asilo (Ley núm. 9/2003, de 15 de octubre) y la Ley del Trabajo (Ley núm. 4/2012, de 21 de febrero).

7. En relación con la migración, y en particular con la delincuencia transnacional, Timor-Leste ha concluido un memorando de entendimiento (MOU) con Indonesia con el fin de cooperar en la prevención y la lucha contra la delincuencia transnacional y establecer lazos de colaboración entre la Policía Nacional de Indonesia y la Policía Nacional de Timor-Leste (PNTL). El MOU fue suscrito el 29 de julio de 2009 por un período de tres años y se renovó en 2012 por la misma duración. El 26 de marzo de 2010, tras la firma de ese MOU, las entidades mencionadas concertaron un acuerdo técnico para llevar a cabo actividades de fomento de la capacidad para los agentes con un período de vigencia de cinco años, que fue renovado en 2015 por la misma duración.

8. Además, Timor-Leste ha firmado un MOU con la República de Corea y otro con Australia para enviar ciudadanos timorenses a trabajar en esos dos países en el marco de la cooperación técnica entre los organismos gubernamentales que envían los trabajadores migrantes (Departamento de Empleo en el Extranjero, de la Dirección Nacional de Empleo, dependiente de la SEPFOPE) y los organismos que reciben los trabajadores migrantes (el Servicio de Desarrollo de los Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Trabajo y Empleo, en la República de Corea, y el Departamento de Educación, Empleo y Relaciones en el Lugar de Trabajo del Gobierno de Australia).

9. El MOU con la República de Corea se firmó en 2012, y el 13 de mayo de 2014 se renovó por otro período de dos años. De acuerdo con el sistema de autorizaciones de trabajo para trabajadores extranjeros, los ciudadanos timorenses son admitidos después de haber seguido un curso de formación en idioma coreano, haber pasado un reconocimiento físico y mental y haber cumplido otros requisitos y se colocan en los sectores pesquero, manufacturero y agrícola.

10. El MOU con Australia se firmó el 1 de diciembre de 2011 sobre la base de un programa experimental de trabajos estacionales que se inició en 2008. En el marco de ese programa los trabajadores timorenses se colocaron en empleos relacionados con la hostelería y la horticultura.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 2 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

11. En 2013, la política relativa a los trabajadores migratorios y sus familiares condujo al establecimiento de la Dirección Nacional de Búsqueda de Empleo y Protección del Desempleado (DNKEPD), dependiente de la Inspección General de Trabajo (IJT). Esa Dirección está facultada para regular el proceso de asignación de empleo a los migrantes que vienen a trabajar en Timor-Leste.

⁵ En el artículo 164.2 de la Constitución se establece que, hasta que se haya establecido la Corte Suprema de Justicia de Timor-Leste, todas las facultades que se confieren a esta en la Constitución serán ejercidas por la más alta instancia de la organización judicial del Estado.

⁶ Constitución de la República Democrática de Timor-Leste, artículo 149.

12. En la actualidad existe también un grupo técnico de trabajo, integrado por la SEPFOPE, la OIM, el Ministerio de Solidaridad Social (MSS), el Ministerio de Comercio, Industria y Medio Ambiente (MCIMA), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación (MREC), el Ministerio del Interior (MI), el MJ, la Secretaría de Estado para la Juventud y los Deportes (SEJD), la SEPSEM, la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia (PDHJ) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se encarga de preparar un plan nacional de acción sobre la migración laboral. El objetivo de ese proceso es examinar las esferas estratégicas y los marcos existentes para reforzar aún más la gestión de la migración laboral y formular recomendaciones al Gobierno de Timor-Leste sobre una gestión que redunde en beneficio de todos.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 3 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

13. En virtud de lo establecido en el Decreto-ley núm. 2/2013, de 6 de marzo, por el que se aprobó la estructura orgánica del MJ, el Gobierno creó la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía con competencias para promover las políticas en materia de derechos humanos; aplicar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los tratados internacionales en esa esfera ratificados por el Estado; redactar planes de acción nacionales en materia de derechos humanos y supervisar su aplicación, así como supervisar el cumplimiento, el desarrollo y el progreso en ese ámbito; preparar documentos de opinión sobre la legislación y las políticas del Gobierno; y redactar todos los informes necesarios sobre la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Timor-Leste⁷.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 4 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

14. Entre 2011 y marzo de 2015, la Dirección Nacional de Visados del MREC expidió 3.441 visados de trabajo, la mayoría de cuyos beneficiarios procedían de Indonesia, China y Filipinas⁸.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 5 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

15. De conformidad con la Constitución, Timor-Leste estableció la PDHJ como órgano independiente no sujeto a la dirección, el control o la influencia de ninguna persona o autoridad, con facultades para examinar denuncias, realizar investigaciones y formular las recomendaciones pertinentes a los órganos competentes a fin prevenir y remediar actos ilegales o injustos⁹. La PDHJ viene desempeñando sus funciones en la esfera de los derechos humanos y la buena gestión de los asuntos públicos desde 2006 y ha reforzado su papel, y cabe señalar que ha ejercido sus funciones con independencia. El propósito de la PDHJ es impedir la mala administración y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio nacional¹⁰, así como realizar actividades de investigación y supervisión y poner en práctica programas de formación y difundir información entre las instituciones gubernamentales y las comunidades. Tras los exámenes realizados en 2008 y 2013, la PDHJ fue acreditada por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos con la categoría "A".

⁷ Decreto-ley núm. 2/2013, de 6 de marzo, artículo 12.2.

⁸ 1.620 trabajadores procedentes de Indonesia, 601 de China y 432 de Filipinas.

⁹ Constitución de la República Democrática de Timor-Leste, artículo 27.

¹⁰ Ley núm. 7/2004, de 5 de mayo, artículos 5.3 y 5.4.

16. Todo ciudadano que haya visto vulnerados sus derechos puede presentar una denuncia ante la PDHJ bien en su sede nacional o en una de sus cuatro oficinas regionales, bien o por teléfono, por Internet, o a través de cualquiera de los buzones de quejas que se han instalado en las administraciones de 65 subdistritos.

17. Hasta la fecha, la PDHJ no ha recibido ninguna denuncia relativa a los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares. Sin embargo, gracias a la labor de vigilancia que lleva a cabo el Departamento de Supervisión y Promoción, la PDHJ ha obtenido algunos datos sobre los trabajadores migratorios que se han visto implicados en procedimientos penales. Esos datos indican que entre enero y julio de 2015 se registraron en total 21 casos que afectaban a 12 trabajadores y 9 trabajadoras migrantes, concretamente delitos de contrabando, explotación sexual de personas y apuestas ilegales. En 2 casos se impusieron penas de prisión, en el primero por un delito de robo con agravantes y en el segundo por tráfico de estupefacientes, y en otro caso, relacionado con la conducción de un vehículo sin licencia, se impuso una multa. La PDHJ tiene 110 funcionarios y cuenta con un presupuesto anual de casi 1,4 millones de dólares de los Estados Unidos.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

18. La PDHJ ha difundido información sobre la ratificación de la Convención y otros instrumentos de derechos humanos, pero no ha puesto en marcha todavía un programa específico para profundizar en el conocimiento de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares.

19. La SEPFOPE, a través de la Dirección Nacional de Relaciones Laborales (DNRT) y la IJT, y en particular la DNKEPD, realizó actividades de fomento de la sensibilización de los empleadores, los trabajadores y las autoridades locales acerca de la Ley del Trabajo, en cuyo artículo 77 se confirma que los trabajadores extranjeros gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que los timorenses, de conformidad con lo previsto en la Convención.

20. Con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Dependencia del Asesor de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la OIM, en 2013 y 2014 se impartieron programas de formación a los agentes de la policía de fronteras para mejorar sus conocimientos sobre cuestiones relativas a la trata de personas y la protección de las víctimas.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 7 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

21. En la sociedad civil hay por lo menos cuatro organizaciones que participan en la protección de los derechos de los trabajadores migratorios de Timor-Leste: la Cámara de Comercio e Industria de Timor-Leste; la Confederación de Sindicatos de Timor-Leste; la Asociación en pro de la Ley, los Derechos Humanos y la Justicia; y la organización Asistencia Jurídica para Mujeres y Niños. Esas organizaciones realizan actividades de supervisión del respeto de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, prestan asistencia jurídica a los trabajadores migratorios, y promueven o participan en la mediación en casos de conflicto entre trabajadores y empleadores. La Cámara de Comercio e Industria y la Asociación en pro de la Ley, los Derechos Humanos y la Justicia tomaron parte en una consulta pública que la SEPFOPE organizó el 14 de abril de 2015 para recabar la información que debía incluirse en el presente informe.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 8 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

22. Para poder desarrollar sus actividades en Timor-Leste, las agencias de empleo deben estar inscritas y autorizadas. En el Decreto-ley núm. 45/2011, de 19 de octubre, en virtud del cual se establece la Clasificación de las Actividades Económicas, esa función se clasifica como “otras actividades o servicios prestados, en particular las empresas que se ocupan de la selección y colocación de personal”¹¹.

23. El Gobierno de Timor-Leste ha concedido licencias por un período de cinco años, que podrán renovarse por un período similar, a dos agencias. Esas dos agencias son KONEKTO e Invertir en las Personas, y hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia contra ellas.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 9 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

24. Tras el *referendum* de 1999, cuando algunas milicias prointegración cometieron actos de violencia contra la población, casi 200.000 timorenses huyeron a Timor Occidental¹². En 2002 habían regresado a Timor-Leste 196.000 de esas personas¹³. Asimismo, cuando Timor-Leste recuperó su independencia como resultado de dicho *referendum*, otros timorenses, en particular los que vivían en Australia, Portugal y Mozambique también regresaron al país, aunque no se dispone de datos sobre el número de retornados de esos países.

25. Hace diez años, cuando se ofreció la oportunidad de trabajar en el extranjero, 33.209 timorenses emigraron a Indonesia, Australia, Gran Bretaña (Inglaterra e Irlanda del Norte) y Portugal¹⁴. La corriente migratoria no incluye a todos los ciudadanos timorenses que se encuentran en el extranjero, ya que muchos de ellos viajaron con pasaporte portugués¹⁵.

26. De los 1.817 trabajadores que emigraron a la República de Corea al amparo de la SEPOPE, 287 han regresado a Timor-Leste y 1.530 siguen trabajando allí. De los 277 que se desplazaron a Australia, 141 han regresado y 136 aún siguen allí.

B. Información relativa a cada uno de los artículos de la Convención

1. Principios Generales

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 10 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

27. La Fiscalía, a través de la policía, se ocupa de investigar los delitos, y la PDHJ también está facultada para analizar denuncias y remitirlas a los tribunales u otras autoridades competentes o explicar cómo pueden presentarse ante ellos. La DNRT y la Dirección Nacional de Condiciones Laborales (DNKT), dependientes de la IJT, también tienen competencia para analizar las denuncias de los trabajadores

¹¹ Esas actividades se incluyen en el Grupo 749 del Cuadro de Clasificación de las Actividades Económicas.

¹² La isla de Timor está dividida en dos partes: Timor-Leste ocupa la mitad oriental, y Timor Occidental la mitad occidental (Indonesia).

¹³ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002.

¹⁴ Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, “Trends in International Migrant Stock: The 2013 Revision”, 2013.

¹⁵ Todos los timorenses nacidos antes de 1999, así como sus hijos, tienen derecho a obtener la nacionalidad portuguesa.

migratorios y para investigar cualquier violación de sus derechos. En el seno de la DNRT se encuadra el Servicio de Mediación y Conciliación, que se encarga de resolver los conflictos que puedan surgir en las relaciones de trabajo individuales o colectivas¹⁶. Cuando no se llega a un acuerdo, el Servicio de Mediación y Conciliación traslada la decisión a la Junta de Arbitraje Laboral¹⁷.

28. Entre 2000 y 2015, el Servicio de Mediación y Conciliación prestó apoyo en 2.647 casos de resolución de conflictos laborales, en 42 de los cuales se encontraban implicados trabajadores extranjeros, 33 hombres y 9 mujeres.

29. Entre 2012 y 2014, la DNKT recibió denuncias de 13 trabajadores extranjeros, 8 hombres y 5 mujeres.

30. En el artículo 34 de la Ley del Trabajo se establece el derecho a recibir una indemnización por los daños resultantes de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En caso de fallecimiento del trabajador, recibirán la indemnización su cónyuge, descendientes, padres o hermanos.

31. En el artículo 55 de la Ley del Trabajo también se contempla el derecho a recibir una indemnización si el empleador no incorpora al trabajador al procedimiento establecido para garantizar los derechos de los trabajadores. En la Ley se contempla la reincorporación del trabajador a su puesto; si el trabajador no lo acepta, o así lo determina un tribunal, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización basada en el período de servicio, con un límite máximo de seis meses de salario.

32. La DNRT y la DNKT han realizado actividades de fomento de la sensibilización en el lugar de trabajo para empleadores y trabajadores con el fin de informar a los trabajadores sobre sus derechos y deberes.

33. Durante los dos últimos años, la DNRT ha realizado actividades de fomento de la sensibilización para 4.241 trabajadores, 3.990 timorenses y 251 extranjeros¹⁸, y la DNKT lo ha hecho para un total de 2.537 trabajadores entre nacionales y extranjeros.

2. Parte II de la Convención

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 11 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

34. En la Constitución de Timor-Leste se afirma que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes, sin discriminación de ninguna clase, sobre la base del principio de igualdad consagrado en el artículo 16.2, con arreglo a las normas de interpretación de la protección de los derechos y deberes fundamentales que se enuncian en la Declaración Universal de Derechos Humanos¹⁹. En el Código de Trabajo se establece que todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migratorios, tienen derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en lo que se refiere al empleo, la capacitación y el fomento de la capacidad profesional, las condiciones de trabajo y la remuneración²⁰. En la ley se incluyen también las normas de la Constitución, en virtud de las cuales ningún trabajador podrá, directa o indirectamente, verse beneficiado, perjudicado, privado de algún derecho o eximido de algún deber por razón de su color, raza, estado civil, género, nacionalidad, ascendencia u origen étnico, situación económica o posición social, convicciones políticas o ideológicas,

¹⁶ Ley del Trabajo, artículo 97.1.

¹⁷ Ley del Trabajo, artículo 101.4.

¹⁸ La DNRT ha impartido orientación acerca de la Ley del Trabajo a 251 trabajadores extranjeros, 187 hombres y 64 mujeres.

¹⁹ Ley del Trabajo, artículo 23.

²⁰ Ley del Trabajo, artículo 6.1.

religión, educación o condición física, salud o edad²¹. En el artículo 77 del Código del Trabajo se establece que los trabajadores extranjeros gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que los nacionales.

35. La Ley de Inmigración y Asilo también contiene una disposición similar en la que se indica que los extranjeros residentes en Timor-Leste gozan de todos los derechos y están sujetos a todos los deberes consagrados en la Constitución y las leyes²². Esa Ley no contiene ninguna disposición clara y concreta en virtud de la cual se prohíba la discriminación por motivos de género y no ofrece protección especial a las mujeres migrantes.

36. El acceso a la atención de la salud en Timor-Leste es igual para nacionales y extranjeros, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias. Los tratamientos y medicamentos se dispensan en los hospitales a título gratuito. El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, asigna 2.000 dólares de los Estados Unidos anuales a los extranjeros procedentes de diversos países, como Portugal, Indonesia, Cuba y Filipinas, que prestan servicio en el Ministerio y están colocados en el hospital nacional y cinco hospitales de referencia, que ascienden a un total de 33 personas, a fin de garantizar la asistencia médica a los que se encuentren enfermos.

37. Los extranjeros, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias, también se benefician de algunos de los servicios sociales que presta el Gobierno a través del MSS, como un ataúd y un vehículo para transportar a una persona fallecida o un vehículo para el traslado de personas que padecen una enfermedad mental. A veces, los niños cuyos padres han abandonado el país para trabajar en el extranjero necesitan que del Gobierno les expida un visado para poder reunirse con sus padres²³.

38. En el ámbito de la educación, los hijos de los trabajadores migratorios pueden acceder a las escuelas públicas en pie de igualdad con los ciudadanos timorenses aunque, debido a las dificultades lingüísticas, muchos asisten a escuelas privadas internacionales.

3. Parte III de la Convención

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 12 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

39. El Estado de Timor-Leste está aplicando algunas medidas concretas, a través de la SEPFOPE y el SM. La SEPFOPE es el organismo encargado de regular las relaciones laborales entre empleadores y empleados a fin de asegurar el cumplimiento de la ley y desempeña sus funciones en ese ámbito, en particular a través de la IJT, mediante el examen de los contratos de trabajo y la realización de inspecciones antes de redactar informes relativos a la expedición de visados de trabajo, y sus inspectores realizan comprobaciones periódicas e inspecciones “de seguimiento” en los lugares de trabajo. También lleva a cabo inspecciones conjuntas con el SM, el MCIMA y el MREC.

40. Durante los dos últimos años, la IJT ha realizado 1.819 inspecciones periódicas en lugares de trabajo que empleaban a un total de 5.326 trabajadores extranjeros, 4.157 hombres y 1,169 mujeres, y ha llevado a cabo inspecciones conjuntas en otros 146 centros de trabajo, con un total de 2.063 empleados de todas las procedencias.

²¹ Ley del Trabajo, artículo 6.2.

²² Ley de Inmigración y Asilo, artículo 5.

²³ Con el fin de reunificar a las familias cuyos hijos han sido separados de sus padres que trabajan en el extranjero, el MSS ha prestado apoyo a esas familias para obtener visados para que sus hijos puedan viajar y reunirse con sus padres.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 13 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

41. Timor-Leste ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en virtud de la Resolución del Parlamento núm. 10/2003, de 17 de septiembre. Además, en el Código Penal se tipifican la discriminación, el odio o la violencia raciales como delitos punibles con penas de prisión de 4 a 12 años²⁴.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 14 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

42. En casos de delitos o infracciones administrativas, como las relativas a la migración, la ley garantiza que las personas objeto de investigación, detención o reclusión tienen derecho, entre otras cosas, a obtener información sobre sus derechos, a no ser sometidas a tortura o malos tratos y a un juicio imparcial, incluida la asistencia letrada gratuita que proporciona la Oficina del Defensor Público.

43. Los trabajadores migratorios, al igual que los timorenses, que se encuentran internados en centros de detención policial por haber, presuntamente, cometido un delito, reciben información detallada sobre sus derechos, tienen acceso a los medios necesarios para comunicarse con sus familiares o con los funcionarios de la embajada de su país y tienen derecho a recibir comida y bebida. No obstante, en los centros de detención imperan unas condiciones muy básicas y, por ejemplo, carecen de sillas o camas apropiadas e incluso de ventilación suficiente. Timor-Leste aún no cuenta con centros de internamiento específicos para cuestiones relacionadas con la migración y tan solo existe una instalación de ese tipo.

44. Cuando se lleva a cabo una inspección, el SM identifica a los trabajadores migrantes que se encuentran en situación irregular, por ejemplo porque carecen de un visado de trabajo. El SM adopta medidas alternativas al internamiento, como la de notificar al trabajador que ha de formular una declaración en las oficinas del SM. Tras analizar la situación irregular, el Director del SM está facultado para adoptar una decisión. Según las circunstancias del caso, se adopta la decisión de notificar al trabajador migrante que ha de pagar una multa y regularizar su situación o se le ofrece la posibilidad de abandonar voluntariamente el territorio de Timor-Leste.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 15 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

45. Según se establece en los artículos 71 a 78 de la Ley de Inmigración y Asilo, para deportar o expulsar a un extranjero que haya entrado ilegalmente en el territorio nacional, es necesario que se haya adoptado una decisión definitiva tras haberse seguido un proceso con las debidas garantías²⁵.

46. En la Ley de Inmigración y Asilo se establece también que la decisión de expulsar a un extranjero puede ser recurrida ante el Tribunal de Apelación²⁶. En los casos en que un extranjero haya entrado y permanecido legalmente en Timor-Leste, la orden de expulsión quedará en suspenso a la espera del fallo de los tribunales. Sin embargo, cuando un extranjero haya entrado y permanezca ilegalmente en Timor-Leste, la apelación de la decisión no tendrá el efecto de suspender la orden de expulsión²⁷.

²⁴ Código Penal, artículo 135.

²⁵ Ley de Inmigración y Asilo, artículo 71.2.

²⁶ Ley de Inmigración y Asilo, artículo 76.

²⁷ *Ibid.*

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 16 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

47. Entre 2011 y 2014, la IJT, mediante operaciones conjuntas, identificó a un total de 159 trabajadores extranjeros que solo poseían visados de turismo²⁸.

48. Hasta la fecha no se han registrado casos de expulsión colectiva de trabajadores migratorios o de sus familiares.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 17 de la lista de cuestiones previas a la presentación de los informes

49. De acuerdo con la estructura orgánica del MREC²⁹, la Dirección Nacional de Asuntos Consulares (DNAK) proporciona protección y asistencia consular a la comunidad timorense en el extranjero con actuaciones como la protección de las familias de los detenidos, la resolución de problemas de repatriación, la coordinación del traslado de restos mortales y la supervisión e información por parte del Gobierno de los riesgos y emergencias que pueden afectar a ciudadanos timorenses en el extranjero con el fin de organizar su evacuación. Los servicios consulares de las embajadas ofrecen protección a los ciudadanos timorenses en el extranjero (tanto si se encuentran en situación regular como si su estancia es irregular), incluidas las funciones básicas de asistencia a todos los ciudadanos timorenses, especialmente en lo que se refiere a la renovación de pasaportes, el traslado de restos mortales y el seguimiento diplomático de casos penales que afecten a ciudadanos timorenses. En ese último caso se incluye la visita a los acusados que se encuentren encarcelados y la búsqueda de asistencia jurídica. Hasta la fecha, la DNAK ha proporcionado asistencia consular a trabajadores residentes en la República de Corea, Filipinas y Australia. Aunque no se proporciona asistencia consular a los ciudadanos timorenses que viven en Inglaterra e Irlanda del Norte, ya que utilizan pasaportes portugueses, el servicio consular presta apoyo a esos ciudadanos para el traslado de restos mortales a Timor-Leste. Para los timorenses que viven en Indonesia, la DNAK, a través del servicio consular de la embajada, proporcionó asistencia jurídica a los ciudadanos timorenses que fueron acusados y encarcelados en Surabaya y a los que fueron investigados en Yogyakarta.

50. Cuando se detiene, encarcela o expulsa a ciudadanos extranjeros presentes en Timor-Leste, las autoridades competentes se ponen inmediatamente en contacto con sus embajadas para que estas puedan prestarles asistencia.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 18 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

51. Como se ha señalado anteriormente, en el artículo 77 de la Ley del Trabajo se establece que los derechos y deberes que se contemplan en la legislación se aplican por igual a los trabajadores nacionales y extranjeros, y no puede discriminarse a los trabajadores extranjeros sobre la base de su situación regular o irregular.

52. No obstante, el Gobierno ha establecido algunos criterios para prestar asistencia a los timorenses en lo que se refiere al empleo. En 2013, la SEPFOPE recomendó que solo se contrataran timorenses, y no extranjeros, para determinados trabajos que no eran muy complicados ni eran de carácter técnico, como el personal de servicio en bares, restaurantes y hoteles, dependientes de tiendas, conductores (con excepción de los vehículos de ocho ruedas y los trabajadores portuarios), recepcionistas, empleados

²⁸ Un informe realizado en 2014 por la IJT sobre los trabajadores extranjeros que trabajaban con visados de turismo arrojó los siguientes datos: 2011: 80 trabajadores; 2012: 26 trabajadores; 2013: 16 trabajadores; y el año pasado: 37 trabajadores.

²⁹ Decreto-ley núm. 9/2014, de 19 de marzo, artículo 3.2.

domésticos (con excepción de aquellos trabajos que exigen una aptitud determinada, como el cuidado de niños o de personas con necesidades especiales, o los cocineros), guardias de seguridad para residencias privadas y lugares públicos, personal de información en centros comerciales, controladores de almacenes (con excepción de los almacenes de obra civil y de las empresas de tamaño mediano o grande), asistentes de servicios como la realización de fotocopias, eliminación de desechos, mantenimiento de jardines y vendedores callejeros³⁰.

53. En otra situación que se contempla en la Ley sobre la Autorización de Actividades Comerciales³¹ se establece que la realización de actividades comerciales en mercados tradicionales y la venta callejera quedan reservadas para los ciudadanos de Timor-Leste.

54. Para completar esos criterios, la SEPFOPE promulgó también una decisión en la que se imponía que los trabajadores extranjeros poseedores de una tarjeta de autorización para trabajar debían desempeñar sus funciones teniendo junto a ellos al menos a una persona de nacionalidad timorense, con el fin de transferirle su conocimiento y experiencia. Cuando no se hace así, la IJT deniega la renovación de la tarjeta de autorización para trabajar o cancela dicha tarjeta y anula el contrato de trabajo.

55. La DNKT recibió algunas denuncias de incumplimiento de la Ley, como un caso en que a una trabajadora migrante procedente de Filipinas no se le concedió licencia de maternidad durante el período establecido en la Ley³² y más de un caso en que trabajadores migrantes no recibieron su prestación anual³³ con el pretexto de que recibían un salario alto.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 19 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

56. En la Ley de Ciudadanía³⁴ se establece que cualquier persona nacida en el territorio de Timor-Leste de padres que no sean timorenses tiene derecho a obtener su nacionalidad de origen. Los niños nacidos en el extranjero de padres timorenses tienen el mismo derecho.

57. Así pues, los niños nacidos en el territorio de Timor-Leste de padres timorenses o con uno o ambos progenitores extranjeros, tienen derecho a la inscripción inmediata de su nacimiento, con indicación de su nacionalidad, en el hospital o centro de salud en el que hubieran nacido o en el registro civil del MJ mediante la presentación de un certificado de nacimiento expedido por el hospital o centro de salud.

58. Puede citarse como ejemplo a un niño nacido de padres que eran ciudadanos de Myanmar cuyo nacimiento fue registrado inmediatamente con la nacionalidad de Timor-Leste.

59. Además, el MJ redactó y presentó un proyecto de ley sobre el Registro Civil que actualmente espera ser debatido y aprobado por el Consejo de Ministros. Para garantizar el registro del nacimiento de todos los niños nacidos en Timor-Leste, los funcionarios del registro civil y también los funcionarios de la administración local

³⁰ Instrucción núm. 232/SEPFOPE-GSE/D/X/2013, sobre la autorización para la redacción de contratos de empleo por escrito y la redacción de informes relativos a los visados de residencia permanente para empleadores y trabajadores extranjeros.

³¹ Ley núm. 24/2011, de 8 de junio, artículo 6.3.

³² De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley del Trabajo, las trabajadoras tienen derecho a una licencia por maternidad de tres meses de duración.

³³ Ley del Trabajo, artículo 44.

³⁴ Ley núm. 9/2002, de 5 de noviembre, artículo 8.

recibieron del UNICEF, en 2015, formación específica sobre el procedimiento de inscripción tras el nacimiento.

60. En cuanto al acceso a la escuela, todos los niños en edad escolar tienen derecho a acceder a las escuelas públicas sin discriminación por motivos de nacionalidad. Hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia de que una escuela pública haya prohibido la asistencia de los hijos de trabajadores migrantes.

4. Parte IV de la Convención

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 20 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

61. Aunque el Estado de Timor-Leste ha establecido representaciones diplomáticas en diversos países y ha establecido su propia entidad responsable de las elecciones (Comisión Electoral Nacional) no se han puesto todavía en marcha los procedimientos necesarios para que los ciudadanos timorenses residentes en el extranjero puedan votar y ser elegidos en las elecciones celebradas en el país.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 21 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

62. En los artículos 44 a 46 de la Ley de Inmigración y Asilo se reconoce el derecho a la reunificación familiar. No obstante, ese derecho no alcanza a todos los extranjeros, ya que el principal requisito para poder presentar una solicitud de reunificación es estar en posesión de una autorización de residencia válida. Para obtener dicha autorización, es necesario obtener un visado de residencia permanente y que no existan impedimentos ocultos que pudieran dar lugar a la denegación del visado, y también es necesaria la presencia en el territorio nacional³⁵. Esos requisitos no se corresponden con las circunstancias de los trabajadores migrantes que trabajan en el país y están en posesión de un visado de trabajo y no de un visado de residencia permanente como se ha mencionado. Así pues, esos requisitos constituyen un impedimento para que todos los trabajadores migratorios puedan ejercitar sus derechos.

63. En respuesta a la situación actual en materia de desarrollo económico y aumento de las corrientes migratorias, en mayo de 2015 el Consejo de Ministros aprobó un nuevo proyecto de ley de migración y asilo que se presentó al Parlamento Nacional con la solicitud de que se tramitara y aprobara con carácter prioritario y urgente. En ese proyecto de ley, el derecho a la reunificación familiar se reconoce no solo a quienes tengan una autorización de residencia, sino también a los trabajadores migratorios, con el fin de evitar cualquier discriminación. En ese proyecto de ley se contempla la autorización de residencia temporal, además del visado de residencia permanente³⁶ y también un nuevo tipo de visado de estancia temporal para las familias dependientes de un extranjero poseedor de una autorización especial de estancia, visado de estudiante, visado para la realización de actividades especializadas, visado de trabajo o visado de negocios de clase II³⁷.

64. Por otra parte, los ciudadanos timorenses que trabajan en el extranjero, en particular los que lo hacen en la República de Corea, no gozan del derecho a la reunificación familiar según la legislación vigente en ese país.

³⁵ Ley de Inmigración y Asilo, artículo 49.

³⁶ Proyecto de ley de inmigración y asilo, artículos 43 y 62.

³⁷ Proyecto de ley de inmigración y asilo, artículo 42.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 22 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

65. La SEPFOPE, mediante acuerdos concertados con la República de Corea y Australia, facilita el estudio del idioma coreano a todos los timorenses que muestren interés en trabajar en la República de Corea, así como sesiones informativas antes de salir de Timor-Leste para quienes hayan sido aceptados a fin de que tengan una cierta comprensión de la legislación, la cultura, las prácticas laborales y otras cuestiones que les resultarán de interés cuando vivan y trabajen en alguno de esos dos países. Cuando los trabajadores timorenses llegan a alguno de esos países asisten a otra sesión informativa organizada por entidades locales, como la policía o las instituciones de derechos humanos, así como a cursos de formación en el lugar de trabajo, antes de emprender sus tareas en las empresas o instituciones que hayan de recibirlos.

66. Todos los niños tienen derecho a asistir a las escuelas públicas, incluidos los hijos de los trabajadores migratorios. No obstante, la enseñanza se realiza en los idiomas oficiales de Timor-Leste³⁸. Los niños extranjeros que asisten a escuelas privadas internacionales cuentan con mayores facilidades para estudiar en otros idiomas, por ejemplo en inglés.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 23 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

67. Hasta la fecha no se han concluido acuerdos bilaterales o multilaterales entre Timor-Leste y otros países para regular la corriente de trabajadores migratorios, aunque se han firmado MOU con la República de Corea y con Australia para enviar trabajadores timorenses a esos países. Los trabajadores timorenses no están sujetos a una doble imposición fiscal, puesto que únicamente pagan impuestos en la República de Corea o en Australia y no en Timor-Leste.

68. Los trabajadores timorenses mencionados anteriormente hacen aportaciones al sistema de la seguridad social en esos dos países y, por tanto, tienen derecho a recibir allí asistencia del Estado, por ejemplo en caso de accidente laboral, licencia por maternidad, etc. Cuando regresan a Timor-Leste pueden obtener el reembolso de sus contribuciones y sus primas de seguros.

69. Timor-Leste no ha concertado ningún acuerdo con Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) en materia de migración y mantiene su condición de Estado observador.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 24 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

70. En la Ley de Inmigración y Asilo se contemplan tres tipos de visados: el visado ordinario, el visado de trabajo y el visado de residencia permanente³⁹. Cuando un trabajador migratorio obtiene un visado de trabajo no necesita obtener otro visado de residencia en Timor-Leste. Los extranjeros que llegan e invierten en Timor-Leste deben obtener un visado de residencia permanente para poder permanecer en el país⁴⁰. Según se establece en la mencionada Ley, el visado de trabajo es válido por un año⁴¹ y el visado de residencia permanente lo es por seis meses⁴².

71. En la Ley de Inmigración y Asilo se establece que para obtener una autorización de residencia un extranjero debe estar en posesión de un visado de residencia

³⁸ Ley Marco del Sistema Educativo, Ley núm. 14/2008, de 29 de octubre, artículo 8.

³⁹ Ley de Inmigración y Asilo, artículo 34.

⁴⁰ Ley de Inmigración y Asilo, artículo 37.4.

⁴¹ Ley de Inmigración y Asilo, artículo 36.3.

⁴² Ley de Inmigración y Asilo, artículo 37.3.

permanente⁴³ y no basta con un visado de trabajo. Así pues, los trabajadores migratorios en posesión de un visado de trabajo no tienen posibilidad de solicitar una autorización de residencia. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, se está tramitando una enmienda de la legislación con el fin de fortalecer los derechos de todos los trabajadores migratorios.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 25 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

72. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley de Inmigración y Asilo, en el que se garantiza el derecho a trabajar, la persona que haya obtenido un visado de trabajo para un empleo concreto que concluya antes de que lo haga su visado no se verá perjudicada por lo que se refiere al período restante de validez de su visado, pero para aceptar un empleo diferente tendrá que obtener la autorización expresa del Departamento de Inmigración y la aprobación del organismo gubernamental competente en materia de empleo.

5. Parte V de la Convención

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 26 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

73. Hasta la fecha no se ha elaborado ningún registro de trabajadores fronterizos, ni está previsto poner en práctica ninguna medida en ese sentido.

74. Aunque no hay ninguna ley en la que se defina qué son los trabajadores fronterizos, como resultado de la ratificación de la Convención y su incorporación al ordenamiento jurídico nacional, las definiciones que figuran en ella pueden aplicarse en el marco jurídico de Timor-Leste.

75. A los fines de considerar las circunstancias a las que se enfrentan las personas que viven cerca de la frontera y la cruzan habitualmente para acceder a los mercados tradicionales o para visitar a la familia o tomar parte en ceremonias tradicionales, Timor-Leste e Indonesia concertaron un acuerdo sobre el cruce de la frontera por motivos tradicionales y se regularon los mercados en virtud de la Resolución del Parlamento núm. 21/2009, de 28 de mayo, para facilitar la circulación de los ciudadanos, mediante la expedición de un pase utilizable en los cruces fronterizos que abarca también a los menores. Ese pase tiene un período de validez de un año y permite a su titular atravesar determinados puestos fronterizos y permanecer al otro lado de la frontera durante un período de hasta diez días.

76. En ese acuerdo no solo se facilitan y regulan las prácticas migratorias para que las comunidades que viven a ambos lados de la frontera puedan desarrollar su actividad comercial y fortalecer las relaciones familiares, sino que también se pretende combatir las redes que se dedican al contrabando y la migración irregular. Se confía en que ambas poblaciones que viven a lo largo de la zona fronteriza de Oecusse se beneficiarán de los esfuerzos conjuntos de la SEPFOPE y la Región Administrativa Especial de Oecusse y la OIM por poner en práctica un plan para hacer frente a las circunstancias que afectan a los trabajadores migratorios de esa región y prestarles apoyo.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 27 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

77. En 2010, Timor-Leste estableció un Sistema de Gestión de Fronteras con el fin de identificar a las personas que sobrepasan el período de validez de su visado y

⁴³ Ley de Inmigración y Asilo, artículo 49.2 a).

permanecen residiendo ilegalmente en Timor-Leste. Cuando un visado expira y su titular no prorroga su validez ni abandona el territorio nacional, el sistema emite inmediatamente una notificación al SM para que busque al titular de ese visado en el lugar que se consignó cuando la persona entró en Timor-Leste.

78. Además, Timor-Leste es miembro del Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos y desde el principio se ha reconocido que Timor-Leste, como Estado de nueva creación en la región de Asia y el Pacífico, podría tropezar con importantes problemas, al igual que los demás países, en la esfera de la migración irregular, la trata de personas y otros delitos transnacionales conexos.

79. Así pues, Timor-Leste concertó un acuerdo bilateral con Indonesia para prevenir y combatir la delincuencia transnacional y sentar las bases de la colaboración entre la policía de Indonesia y la PNTL, que entró en vigor en 2010 con un período de vigencia de tres años y se renovó en 2013 por un período similar. Con arreglo a ese acuerdo, ambos países colaboran para ampliar y profundizar su cooperación compartiendo información y experiencias en los ámbitos de la formación y capacitación y la ejecución conjunta de actividades operacionales. Esas dos instituciones también concertaron un acuerdo en materia de formación con una duración de cinco años, renovable por un período similar.

80. Esas medidas no solo sirven para fortalecer la colaboración y el fomento de la capacidad para prevenir y combatir la delincuencia transnacional, sino que facilitan también el control de las corrientes migratorias gracias al intercambio de información y sirven de apoyo al Gobierno a la hora de elaborar políticas y programas en todas las esferas relacionadas con la migración.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 28 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

81. El Estado de Timor-Leste, a través de la SEPFOPE, proporciona asistencia a los trabajadores migratorios que vuelven al país, en particular los que regresan de la República de Corea y Australia, para inscribirse en los centros de empleo. La SEPFOPE proporciona también servicios de asesoría y mediación a quienes buscan formación o empleo en el país o en el extranjero a través de un sistema de información sobre el mercado de trabajo denominado SIMU-BUKA (busca-encuentra).

82. En cuanto a la reintegración social, no se ha recibido hasta la fecha información de que ningún trabajador migratorio o miembro de su familia haya encontrado problemas al retornar a Timor-Leste. Normalmente, los que regresan son recibidos calurosamente por la comunidad.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 29 de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

83. Timor-Leste ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional mediante la Resolución del Parlamento núm. 26/2009, de 9 de septiembre, y también el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños⁴⁴. Yendo más allá de lo que se establece en esos instrumentos, Timor-Leste considera que la trata de personas es un delito contra la libertad personal que se castiga con penas de prisión de 8 a 20 años⁴⁵ o, si se encuentran agravantes, de 12 a 25 años⁴⁶. Por último, para fortalecer la

⁴⁴ Resoluciones del Parlamento núms. 27 y 29/2009, de 9 de septiembre.

⁴⁵ Código Penal, artículo 163.

⁴⁶ Código Penal, artículo 164.

legislación existente, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley contra la trata de personas que está a la espera de su aprobación y promulgación por el Parlamento Nacional.

84. En la nueva Ley de Migración y Asilo también se ofrece especial protección a las víctimas de la trata de personas. En virtud de esa Ley, el Gobierno tiene la obligación de proporcionar a las víctimas de la trata de personas y sus familias medios de subsistencia, alojamiento, un cuidado apropiado de la salud física y mental, protección, seguridad y asistencia jurídica, así como una autorización de residencia temporal por dos años⁴⁷.

85. En 2011, el Gobierno estableció un Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas, presidido por el MREC e integrado por ministerios y organizaciones de ámbito nacional e internacional, como la OIM, encargado de eliminar esa lacra. Dentro de ese Grupo de Trabajo se estableció un subcomité encargado de redactar legislación específica sobre la trata de personas y otro encargado de redactar un plan de acción nacional.

86. Entre otras medidas tendientes a combatir la trata de personas cabe mencionar el establecimiento de una Unidad de Personas Vulnerables dentro de la PNTL encargada de investigar casos de violencia de género, que incluye la violencia doméstica, el rapto, el maltrato infantil, la trata de personas y otros delitos cometidos contra quienes no tienen capacidad para defenderse. Esa unidad opera a nivel nacional con 1 comandante y 2 oficiales y cuenta también con 7 u 8 oficiales a nivel municipal. En 2012 la unidad disponía de 99 oficiales en los 13 municipios.

87. En 2012, el Gobierno organizó una Conferencia Internacional sobre la Trata de Personas con el propósito de fomentar el conocimiento del marco jurídico y los mecanismos nacionales e internacionales sobre la trata de personas, especialmente de mujeres.

88. En 2010, la OIM impartió en todos los municipios cursos de formación conocidos como HELP III a un total de 377 representantes de la PNTL y otros órganos judiciales, organizaciones no gubernamentales y funcionarios de las embajadas y consulados de Timor-Leste sobre la trata de personas y el cumplimiento de la legislación.

89. La sociedad civil, a través de la organización nacional Recuperación Psicosocial y Desarrollo en Timor-Leste, y con el apoyo del Gobierno, a través del MSS y la OIM, estableció una casa refugio para mujeres y niños víctimas de la trata en la que se les presta apoyo continuo, atención de la salud física y mental y ayuda para la repatriación y la reinserción.

90. Entre 2008 y 2011, se identificó a 50 víctimas de la trata, 33 de las cuales provenían de países como Myanmar, Camboya, Indonesia, China y Filipinas. Esas víctimas recibieron asistencia del SM, la OIM, la Red contra la Violencia de Género y otros organismos⁴⁸.

91. En 2011, los tribunales condenaron a dos extranjeros a penas de 13 años y 6 meses, respectivamente, por el delito de trata de personas.

92. Ese mismo año, el subcomité del Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas encargado de redactar un proyecto de ley para prevenir y combatir la trata de personas presentó una propuesta al Parlamento Nacional. Sin embargo, dadas las especiales circunstancias que rodearon el debate y la aprobación de esa propuesta, en 2013 el

⁴⁷ Proyecto de ley de migración y asilo, artículo 62 e) y artículo 65.

⁴⁸ Informes del Gobierno de 2013 acerca de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

MREC y el MJ introdujeron revisiones en el proyecto de ley, que fue posteriormente presentado al Consejo de Ministros. El Consejo aprobó ese proyecto que se presentará ahora al Parlamento Nacional para su examen y aprobación que culminará con su promulgación por el Presidente de la República. En la ley para prevenir y combatir la trata de personas no solo se establecen las medidas, los procedimientos y las consecuencias para quienes participen en esos delitos, sino que también se contemplan los derechos y garantías de las víctimas, se crea un fondo especial para indemnizarlas y se exponen las medidas que habrán de adoptarse para mejorar e intensificar la cooperación y la coordinación en esa esfera a nivel nacional e internacional, especialmente en lo relativo a la identificación de las víctimas y el intercambio de información.

Respuestas a las cuestiones planteadas en la parte II de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

93. Los principales instrumentos legislativos en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares son la Constitución, la Ley del Trabajo y la Ley de Inmigración y Asilo.

94. Las entidades que intervienen en la protección de los derechos de los trabajadores migratorios son las SEPFOPE, el MI (a través del SM), el MREC y el MJ.

95. Para evaluar y mejorar las circunstancias de los trabajadores migratorios y sus familiares en Timor-Leste, el Gobierno, con el apoyo de la OIM, estableció en 2015 un Grupo de Trabajo Técnico sobre la Migración Laboral integrado por la SEPFOPE, la OIM, el MSS, el MCIMA, el MREC, el MI, el MJ, la SEJD, la SEPSEM, la PDHJ, y la OIT. El Grupo de Trabajo redactará un plan de acción nacional y formulará recomendaciones al Gobierno acerca de cómo mejorar las estrategias y normas existentes relativas a la migración laboral, la protección y el empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras migrantes y los jóvenes desempleados.

96. Timor-Leste no tiene todavía previsto ratificar los Convenios núms. 97, 143 y 189 de la OIT ni formular declaraciones en relación con los artículos 76 y 77 de la Convención.

97. En 2013, Timor-Leste, a través del SM y junto con el Observatorio de la Migración de los Países de África, el Caribe y el Pacífico, realizó un estudio titulado “Nuevo país, nuevas necesidades, nuevas respuestas: migración laboral irregular hacia Timor-Leste”, en el que se presentaba un panorama de la situación en materia de migración irregular en Timor-Leste, con especial atención a las circunstancias de los trabajadores migratorios.

Respuestas a las cuestiones planteadas en la parte III de la lista de cuestiones previas a la presentación del informe

98. En enero de 2015, tres hombres de la República de Indonesia fueron acusados y condenados a penas de prisión por el delito de importación ilegal de mercancías⁴⁹.

99. Algunos ciudadanos timorenses emigrados a Inglaterra fueron detenidos, juzgados y condenados a penas de prisión de entre 6 y 11 meses. Se trataba de 16 hombres timorenses, con pasaporte portugués, acusados y condenados por los delitos de alteración del orden, comisión de actos de violencia y posesión de armas peligrosas.

100. Los ciudadanos timorenses, en particular los que trabajan en la República de Corea, han remitido hasta la fecha un total de 4,9 millones de dólares de los Estados

⁴⁹ Información obtenida de la organización no gubernamental Programa de Vigilancia del Sistema Judicial.

Unidos a Timor-Leste. Los que trabajan en Australia han remitido un total de 1,1 millones de dólares⁵⁰. Esas remesas han dado lugar a que la SEPFOPE elabore su propia política para velar por que los ciudadanos timorenses que emigran para trabajar en el extranjero sigan contribuyendo al desarrollo de la nación, para lo que se presta asistencia a sus familias para que puedan enviar a sus hijos a la escuela, abrir negocios, construir viviendas, etc. de manera que, en el futuro, cuando regresen a Timor-Leste, tengan una reserve de efectivo suficiente para mantenerse.

101. Por lo que se refiere a los recursos enviados desde Inglaterra, se calcula que unas 9.000 familias reciben 370 dólares al mes de los timorenses que trabajan allí.

102. De las remesas recibidas, el 43% se reciben mensualmente y el 28% se reciben de manera intermitente y se destinan a gastos familiares o sociales, como atender a las necesidades familiares o sufragar funerales. Además, el 45% se utiliza para los gastos cotidianos, el 41% para mejorar la vivienda, el 30% para pagar los honorarios escolares y el 10% para pagar deudas. Tan solo el 33% se utiliza para invertir en algún tipo de negocio⁵¹.

⁵⁰ Informe de la Dirección Nacional de Empleo, SEPFOPE, 2014.

⁵¹ Leveraging Remittances with Microfinance: Timor-Leste Country Report on remittances, diciembre de 2007.